

FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

Octubre 1029

Un estallido social que cambio la agenda y la imagen internacional del país

El estallido social gatillado por el alza de tarifas del metro, sorprendió por igual al gobierno, los partidos políticos, empresarios, así como a observadores nacionales e internacionales que, sin demasiado rigor analítico, estaban dispuestos a compartir la idea de que Chile constituía un “oasis” en la región, como afirmara el Presidente de la República tan sólo unos días antes, ignorando las múltiples señales de un extendido malestar social de muy diversos orígenes.

Con toda propiedad se puede afirmar que nadie vio venir este reventón social que ha puesto en jaque al gobierno, asombrado a los observadores internacionales y desafiado a los sectores políticos, pero es preciso reconocer que la mandamos traer.

El periodista Andrés Openheimer ha atribuido esta crisis a una más propia de los países desarrollados, como la crisis protagonizada por los “chalecos amarillos” en Francia o las protestas de los indignados en España pero, en verdad, es una protesta transversal que cruza diferentes sectores sociales, con motivaciones muy diversas.

“No son los \$30 pesos de la tarifa del metro. Son treinta años de injusticia” sostienen muchos, aludiendo a las insuficiencias del proceso de transición a la democracia que, por cierto, dista de ser modélica. Pero se olvidan de los 17 años de régimen militar, en donde se implantó, mediante la fuerza y la represión, un modelo económico neo liberal, que favorecía una fuerte concentración de la riqueza y pauperizaba a los sectores de menores ingresos. Durante ese período se redactó una constitución que sucesivas reformas no han logrado erradicar su matriz conservadora. Allí se diseñó el

actual sistema previsional que ha mostrado sus límites, se privatizaron servicios esenciales y se erosionó la salud y educación pública que laboriosamente había construido el país a lo largo de su historia.

Es innegable, como lo sostiene el gobierno, que muchos de estos problemas se arrastran por décadas y algunos dicen relación con la pesada herencia que nos legara el régimen militar y las dificultades objetivas que se enfrentaron durante el proceso de transición, pese a sus innegables éxitos, para avanzar más decididamente en su superación.

Es indispensable asumir que el pacto social y político que posibilitó el proceso de transición está largamente agotado y hoy se requiere de un nuevo pacto político, económico, social e institucional que comprometa a los diferentes actores.

Lo único cierto es que la paciencia, y por momentos pasividad, de los ciudadanos ante un orden injusto y excluyente, llegó a su límite y explotó en multitudinarias jornadas de movilización y protesta, en su inmensa mayoría de carácter pacíficas, que incluyó no tan sólo a sectores populares o las llamadas clases medias emergentes y vulnerables, sino también sectores acomodados.

Un análisis por separado merece los actos de violencia que han rodeado estas manifestaciones, en donde no se puede descartar a priori una cierta concertación y planificación de ciertos grupos violentistas, así como la participación de organizaciones criminales con el objetivo de saquear o destruir propiedad pública y privada, que la inmensa mayoría del país repudia y rechaza.

Son muchas y muy variadas las causas que pueden explicar este fenómeno. Sin lugar a dudas, en su origen, está el tema de las profundas desigualdades que marcan el acelerado proceso de desarrollo del país en los últimos 25 años. Desigualdades en la distribución del ingreso, en el acceso a servicios públicos de calidad (con salud y educación para ricos y pobres), ciudades extremadamente segregadas, salarios insuficientes y pensiones miserables, que configuran un verdadero país dual y un modelo económico que privilegia soluciones de mercado para problemas públicos.

Pero está también el tema de los abusos y malas prácticas empresariales, como cobros abusivos en el precio de los medicamentos, prácticas de colusión, alza de tarifas excesivas en los servicios públicos (luz, agua, electricidad, transporte, etc.).

A ello se añade prácticas de financiamiento ilegal de la política que buscan capturar cuotas de poder en el Estado. Sueldos y dietas excesivas para los parlamentarios y altos funcionarios públicos, además de prácticas de corrupción en el Estado.

El gobierno sobrepasado

El gobierno aparece largamente sobrepasado y con enormes dificultades para asumir la gravedad de la crisis que hoy enfrenta el país. Tanto por su incapacidad e insensibilidad para asumir el malestar social, tal como lo reconociera el propio mandatario, que pidió perdón por esta falta de visión, como por sus propias prioridades, centradas en el esfuerzo en bajar impuestos a los sectores de mayores ingresos, oponerse a la reducción de la jornada laboral, apostando a flexibilizar el empleo, con enormes riesgos de precarización, o impulsar un proyecto de reforma previsional que no asegura una mejoría de las actuales pensiones sino de una manera muy gradual e insuficiente. Todo ello, en los precisos momentos en que se anunciaba un alza de las tarifas eléctricas o del pasaje del metro.

Las propias e imprudentes declaraciones de algunos de sus ministros, recomendando que los trabajadores se levantaran más temprano para aprovechar la rebaja de tarifas, o que aprovecharan de comprar flores que habían bajado de precio, tan sólo contribuyeron a atizar la hoguera.

Tampoco la respuesta gubernamental frente al estallido social y los actos de violencia que lo acompañaron parecieron la más adecuada. Sobre todo su decisión de declarar el Estado de emergencia y sacar las FF.AA. a las calles, restableciendo el toque de queda, de triste memoria en el país, no contribuyeron al restablecimiento del orden y dejan un triste saldo de 30 muertos, centenares de detenidos y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que deberán ser investigadas por la justicia.

Chile cambió tras esta crisis y tanto el gobierno como los actores políticos están desafiados a dar cuenta de este nuevo escenario

La crisis social que aún enfrenta el país no tan sólo cambió la agenda del gobierno y de la oposición, Cambió la imagen del país. Y por más que algunos analistas internacionales afirmen que es una crisis más propia de países desarrollados y que si sucedió en Chile puede suceder en cualquier parte (como temen varios países en la región), es más que evidente que el país ya no es el mismo para los analistas e inversionistas internacionales, como ha quedado reflejado en la actividad bursátil.

Tampoco es el mismo para los propios chilenos. La imagen de Chile como un oasis se desplomó bruscamente para mostrar la cruda imagen de un país sacudido por fuertes conflictos sociales, no exentos de violencia, que es preciso atender de manera urgente.

El gobierno está desafiado a redefinir sus prioridades y el propio programa de gobierno ofrecido al país. Claramente, la propuesta de reintegración o simplificación tributaria carece de toda viabilidad en el nuevo escenario que se ha generado en el país tras esta

crisis. El propio debate presupuestario para el año próximo debe ser analizado a la luz de este nuevo escenario. Así como el proyecto de reforma previsional, la reducción de la jornada laboral y muchos otros proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso.

La propuesta de una nueva agenda social propuesta por el Presidente, aunque claramente insuficiente, se oriente en una buena dirección, especialmente en temas como el incremento de las pensiones mínimas y solidarias, o el incremento del salario mínimo, la rebaja de las dietas parlamentarias y los altos sueldos en el Estado, así como el incremento de los impuestos de los sectores de mayores ingresos o la redistribución del fondo común municipal, pero apenas se constituyen en un punto de partida que es necesario profundizar.

Una cosa muy distinta es la propuesta de reducir el número de diputados a 120. Introducida de contrabando por el gobierno en su llamada agenda social. La propuesta puede ser muy popular para aquellos sectores que abominan de la política y de la propia democracia representativa, pero el incremento de parlamentarios permitió terminar con el sistema binominal y posibilitar la representación de sectores minoritarios que hacen parte de la diversidad política del país, que es necesario preservar.

El gobierno hizo bien en llamar a un diálogo nacional para enfrentar la crisis. Un diálogo al que ningún sector político puede restarse. Pero es preciso asumir que este diálogo debe incluir a sectores sociales y sus organizaciones. A las Universidades y centros de pensamiento, organizaciones empresariales, sindicatos, autoridades locales y organizaciones vecinales, buscando generando un espacio de diálogo institucional que establezca las bases de un nuevo pacto social y político que el país requiere para enfrentar la profundidad de la crisis.

La responsabilidad social empresarial

Es más que evidente que los sectores empresariales, que tan sólo concentraban sus prioridades en temas vinculados al crecimiento económico, la inversión y el emprendimiento (con tímidas preocupaciones por los temas vinculados a la responsabilidad social empresarial o el cuidado del medio ambiente) deberán incorporar, de manera mucho más decidida, la preocupación por la inclusión y cohesión social que posibilita un desarrollo sostenido e inclusivo.

La modernidad es cara y ello requiere de aportes mucho más sustantivos para financiarla. Es importante que un grupo empresarial decida elevar el salario mínimo de sus empleados y que otros grupos se decidan a seguir su ejemplo. Pero tanto o más importante es que los empresarios asuman que un modelo de desarrollo que genere inequidades y profundas desigualdades no es simplemente sostenible. Que se decidan a pagar impuestos acordes a sus ganancias. Que renuncien a injustificadas exenciones

tributarias y prácticas de elusión o colusión empresarial. Que mejoren las relaciones laborales, respeten los sindicatos, que inviertan en ciencia, innovación y tecnología y que se constituyan en un facto del desarrollo inclusivo que requiere el país.

Los desafíos para la oposición

Como toda crisis, la actual representa no tan sólo una oportunidad sino también un desafío mayor para el conjunto de la oposición. Es preciso asumir que no tan sólo los partidos políticos sino también las instituciones democráticas y la actividad política en su conjunto, enfrentan una profunda crisis de legitimidad y credibilidad que es urgente enfrentar.

Al igual como lo deberá hacer el propio gobierno, los partidos deben redefinir la manera como cumplen su función de representación social, reconectarse con la sociedad de una manera más horizontal y dialogante, para asumir con responsabilidad las principales demandas ciudadanas, distinguiendo las principales de las accesorias, para traducirlas en propuestas y proyectos que apunte a enfrentar las profundas desigualdades que aún marcan nuestro proceso de desarrollo.

Les corresponde a los actores políticos canalizar el profundo descontento y malestar social que se han expresado en las multitudinarias movilizaciones sociales, para transformarlas en políticas públicas que permitan superar, de manera gradual pero sostenida, estas inequidades y desigualdades que se constituyen en trabas al desarrollo del país.

La propuesta formulada por la bancada de senadores socialistas para enfrentar esta crisis y reformular la agenda política y legislativa difícilmente puede ser asumida por el gobierno y la propia coalición oficialista, a menos que dichas propuestas pueden ser consensuadas no tan sólo por el conjunto de la oposición, sino también por sectores del oficialismo que se han manifestado más abiertos a cambios y rectificaciones. Y necesariamente deben contar con explícitos respaldo de parte de amplios sectores sociales, incluyendo empresarios y trabajadores.

Está bien demandar responsabilidades políticas por graves violaciones a los derechos humanos y el uso desmedido de la fuerza como las que se han registrado en estas movilizaciones. De allí a embarcarse en una acusación constitucional en contra del Jefe del Estado, condenada de antemano al fracaso, media un abismo. Ello tan sólo puede conducir a profundizar la polarización, restando espacios a los consensos que hoy se requieren para avanzar.

Es muy posible, para no decir indispensable, que el país requiere de una nueva Constitución que consagre las bases del nuevo pacto social, político y económico que el país necesita. Pero aquello hace parte de un proceso, que debe priorizar medidas urgentes para cambiar el rumbo del país, además de un intenso proceso de diálogo y

construcción de consensos esenciales en donde fundar este nuevo pacto y una nueva constitución, idealmente a través de una Asamblea constituyente o fórmulas mixtas.

Al contrario de lo que piensan muchos sectores despolitizados y refractarios a la actividad política, parece haber la hora de que los partidos busquen canalizar las demandas ciudadanas y reformulen sus propias agendas y la manera como se vinculan con la sociedad.

